



Columna

Frank Sauerbaum,
diputado por Ñuble



Desafíos en educación para el nuevo gobierno

Tras casi un año de cierre de colegios por la pandemia, el principal desafío del Gobierno actual era devolver a la normalidad el proceso educativo con foco en recuperar los aprendizajes, la asistencia a clases y disminuir la deserción escolar.

Sin embargo, los principales esfuerzos tanto en términos de recursos –el Presupuesto 2026 considera una disminución para la educación parvularia y escolar, y, en cambio, un significativo aumento para la educación terciaria–, como legislativos han ido a la educación superior, un nivel donde las desigualdades educativas ya son patentes y donde menos impacto se puede lograr en entregar más oportunidades a los alumnos más desaventajados.

En ese sentido, la asistencia a clases si bien ha ido mejorando, durante 2025, sigue por debajo del promedio del año 2019 (que ya tenía una baja respecto al año anterior producto de las protestas), con más de 1 cada 4 alumnos con inasistencia grave.

Ello puede explicarse en parte porque el Plan de Reactivación ha sido insuficiente, e incluso fue cuestionado por la Contraloría por su baja cobertura, escasa asignación de recursos y poca transparencia, lo que se ha visto reflejado en los resultados educativos.

La prueba SIMCE de 2024 revelaron un alza para los alumnos de 4° básico, pero descensos en 6° básico y un estancamiento en II° medio. Cabe destacar que en estos últimos dos niveles aún no se recuperan los niveles de

aprendizaje que exhibían antes de la pandemia.

Por su parte, los resultados de la Prueba de Admisión para la Educación Superior (PAES) sigue mostrando el deterioro de los resultados de los liceos emblemáticos y de la educación pública en general, que no logra posicionar a sus egresados entre los de mejores puntajes, lesionando sus posibilidades de acceder a carreras universitarias de mayor prestigio que permitan insertarse con éxito en el mercado laboral. Uno de los desafíos centrales para el nuevo gobierno sería compatibilizar una visión de mayor focalización del gasto y control fiscal con las necesidades estructurales del sistema público.

Mantener estándares de calidad en educación escolar y superior exigiría redefinir prioridades sin debilitar a los establecimientos que atienden a estudiantes vulnerables. Además revertir el estancamiento en indicadores como SIMCE y pruebas internacionales requeriría fortalecer evaluación docente, formación inicial y liderazgo directivo, evitando que el debate ideológico opaque decisiones basadas en evidencia. Otro reto será revisar el currículum escolar para reforzar aprendizajes fundamentales, educación cívica y técnico-profesional, equilibrando contenidos valóricos con competencias laborales y productivas. Finalmente, mejorar el clima escolar y enfrentar la violencia exigiría políticas claras de convivencia, fortalecimiento de la autoridad pedagógica y apoyo psicosocial, entre otros desafíos.